LA JUSTICIA EN EL PALACIO DE CONGRESOS

EL MUNDO. LUNES, 17 DE FEBRERO DE 1997

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

La pobreza del vocabulario causa trastornos al pensamiento. Si una misma palabra designa cosas superficialmente parecidas pero sustancialmente diferentes, 2.000 años de reflexión no bastan para precisar sus conceptos. La justicia es una virtud personal, una convención social y un oficio público. Como virtud define un modo de ser ecuánime con los demás, una forma objetiva de pensar y de actuar las relaciones individuales. El modelo es la equidad. Su criterio, la templanza. Como convención, la justicia indica una determinada relación de equilibrio en la distribución de la riqueza, el saber, el trabajo y el bienestar entre las distintas clases y categorías de la sociedad. El modelo es la igualdad. Su criterio, la solidaridad. Como oficio, la justicia administra el reconocimiento de los derechos y la represión de los delitos. El modelo es la imparcialidad. Su criterio, la legalidad. Estos tres usos del vocablo justicia han perfilado los arquetipos de hombre justo, pueblo justo, Estado justo, que se reflejan idealmente en las expresiones justicia moral, justicia social y justicia legal.

Para que la justicia legal pueda ser imparcial hace falta que su administrador sea independiente de todo poder con capacidad para inquietarlo o corromperlo. El juez dice el derecho como el médico la medicina. Tan monstruoso es un juez que falsee o dilate su resolución por razón de Estado, de Gobierno o de partido, como un médico que precipite la muerte o retrase la curación de un enfermo en provecho de la clínica que lo emplea. Conquistar la independencia formal de la justicia ante el poder político no presenta ningún misterio técnico. Bastaría una reforma de la Constitución que impidiera a los dos poderes políticos controlar el reclutamiento y la promoción de los miembros de la carrera judicial, sin caer en corporativismo. La dificultad está en cómo romper la inercia de una tradición, basada en la exaltación de la conciencia y en el desprecio de la independencia, que mantiene sujeta la justicia a la razón de Estado y de Gobierno. Porque sin independencia, la justicia no es digna. Y con ella, sólo lo sería si la verdad instructora expulsa de la justicia a la prudencia sentenciadora.

Las encuestas muestran la degradación institucional alcanzada por el oficio de la justicia bajo el Estado de partidos. La sociedad política y las asociaciones profesionales de fiscales, jueces y magistrados no parecen estar interesadas, a juzgar por su falta de ideas y de iniciativas, en modificar esta vergonzosa situación operando sobre las causas que la producen. Pero la sociedad civil y el mundo jurídico, como los periodistas y los universitarios, no pueden inhibirse ante esta catástrofe judicial que socava los cimientos de la confianza social en las tareas civilizadoras que se esperan de la justicia. Por esta exclusiva razón, un grupo de juristas demócratas, contrarios a la sistemática influencia del Gobierno y los partidos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en los juzgados que instruyen delitos políticos, ha decidido celebrar un gran acto público (Palacio de Congressos, 20 de febrero a las 20 horas) de apoyo civil a la dignidad de la justicia, que simbolizan dos puñados de jueces y fiscales. Ahí, junto a los maestros Enrique Gimbernat, Joaquín Navarro y Federico Carlos Sainz de Robles, tendré el honor de defender la reforma democrática del poder judicial, separándolo formalmente de los otros dos poderes, y de sentar las bases culturales de la ruptura moral con esa tradición servil que exige a la conciencia judicial ser heroica o mártir, para poder ser decente. ¡Que bella ocasión para encontrarme allí con los lectores habituales de esta columna!